

Cuatro años después

Ante amplios sectores de la opinión pública, incluidos aquellos que se consideran de izquierdas, José María Maravall es la cara progresista de un Gobierno al que nadie, con seriedad, puede juzgar como realizador de una política de izquierdas.

Mientras el Gobierno de Felipe González ha impulsado una política económica y social de más claro cuño conservador, con la aquiescencia de los grandes bancos, que nos ha llevado a combinar la escalofriante cifra de 3 millones de parados (el 22,5 por 100 de una disminuida población activa) con escandalosos beneficios empresariales que han aupado en cinco puntos su cuota de participación en la renta nacional en detrimento de las rentas salariales; mientras el Gobierno de Felipe González se ha dedicado a recortar los sistemas de protección (pensiones, gastos sanitarios...) de un supuesto Estado de Bienestar del que todavía no habíamos disfrutado los españoles; mientras el Ministro del Interior del Gobierno de Felipe González aupaba a importantes puestos de responsabilidad a conocidos torturadores del régimen franquista entre otras muchas aportaciones a la defensa de las libertades; mientras Felipe González, con la inestimable ayuda de TVE, logró convencer a un número suficiente de ciudadanos de que los argumentos por él mismo esgrimidos para pedir hasta 1982 la salida de la OTAN eran erróneos, contrarios a la seguridad nacional y su triunfo, en referéndum, abriría las puertas del caos; mientras tantas otras cosas de parecido sesgo sucedían en 42 meses de Gobierno, nuestro Ministro Maravall ha aguantado hasta las puertas de la campaña electoral una fuerte ofensiva de los sectores más conservadores de la enseñanza y de la sociedad contra la LODE y su política hacia la enseñanza privada.

Esta es la razón fundamental de su imagen pública de hombre de izquierdas del Gobierno. Los obispos, siempre más prudentes y juiciosos que los dirigentes del "lobby" empresarial de la enseñanza privada, han parado la batalla final cuando estaba a punto de sonar el pistoletazo de salida de la campaña electoral del 22 de junio. Saben que, a pesar de todo, el régimen de conciertos preserva la existencia de una importante red escolar privada financiada con fondos públicos; una red con "carácter propio".

Dedicamos el tema del mes a hacer un balance de la política educativa de estos cuatro años. En sus páginas se da una respuesta matizada y pormenorizada a las preguntas: ¿Respondió, o no, la política educativa, a la aludida imagen pública del Ministro?, ¿se cumplió el programa electoral?

Nuestra común respuesta, en esquemático resumen, es: en gran medida no. Se podría añadir que las reformas de orientación progresista iniciadas, fueron negativamente condicionadas por la carencia de un modelo global del sistema educativo, por la falta de planificación, coordinación y participación de los afectados y por la escasez de los recursos financieros. La política presupuestaria del Gobierno fue una de las principales causas de los mayores incumplimientos del programa (escolarización de 0 a 6 años y de 14 a 16, entre otros). Si hablamos de las políticas de personal y sindical, nuestra crítica tiene que utilizar los tonos más duros.

En fin, el margen de confianza que dimos, a los responsables del MEC, al comienzo de su gestión, se ha agotado.